



## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS, DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES CON NECESIDAD DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA INTENSIVA (4 PLAZAS)”.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones.

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la Dirección General de la Familia y el Menor en Centros Residenciales que, o bien son propios y son gestionados directamente por la Dirección General de la Familia y el Menor, o bien son contratados y están gestionados por Entidades.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento del objeto del contrato:

- La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor así como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid destacan como principio rector de toda actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor.

Por su parte, en el artículo 66 **contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.**

- La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales y Familia) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Así mismo, esta Ley Orgánica establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia, y exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

- La Ley 2/1996 de 24 de junio, por la que se creó el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, encomienda a este Organismo ejercer las competencias que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de protección de menores. Con la extinción del IMFM por Decreto 72/2015, de 7 de julio, en virtud del cual se modificó la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se estableció que las competencias del Instituto fueran asumidas por la Dirección General de la Familia y el Menor.





- Por su parte, el Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a estas Residencias el desarrollo de las funciones de educación y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.
- La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.
- La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que determina los sectores de infancia y juventud marginada como tributarios de atención por los Servicios Sociales, a fin de prestarles la adecuada protección previniendo su marginación, fomentando su participación social y favoreciendo su incorporación a la sociedad mediante actuaciones normalizadoras e integradoras. Ello de conformidad con los principios que el art. 3 de dicho texto legal señala como inspiradores de los Servicios Sociales y de entre los que cabe destacar el de responsabilidad pública y el de colaboración de la iniciativa privada.
- La Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad.

Por su parte, el artículo 14 se refiere a los supuestos de “Atención Inmediata” estableciendo que *“las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal”*

Hemos de tener en cuenta que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.





En su preámbulo apartado II se recoge *”Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección, en un número cada vez más elevado, a petición de sus propias familias, ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental. Su situación psicológica y social demanda soluciones diferentes a las que ofrecen los centros de protección ordinarios o sus familias y requieren de un ingreso en centros especializados, previo informe sobre su situación social y sobre su estado psíquico”.*

Y prosigue diciendo. *“La justificación de recursos específicos destinados a atender graves problemas del comportamiento, así como situaciones de crisis, radica en la necesidad de proporcionar a estos menores un contexto más estructurado socio-educativo y psicoterapéutico, que solo un programa específico pueda ofrecerles...”*

El objeto del contrato es proporcionar acogimiento residencial a 4 menores con medida de protección adoptada por la Comisión de Tutela de la Dirección General de la Familia y el Menor, a los que, por sus especiales características, **debido a la gravedad de la patología y de los síntomas que presentan y que no se les presta este servicio en otros recursos de Salud Mental de la Red Pública, excediendo asimismo de la intervención que se puede efectuar en los recursos de acogimiento residencial especializado existentes en la Red de Protección del Menor.**

Son menores que, por su perfil o la gravedad de su patología, **requieren atención terapéutica intensiva y ayuda constante por parte de profesionales para desarrollar las actividades de la vida diaria, así como contar con una infraestructura apropiada y personal altamente cualificado.**

Las edades de los menores estarán comprendidas entre los 12 y los 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al de cumplimiento de los 18 años).

La finalidad es alcanzar el máximo nivel posible de normalización, recuperación en su comportamiento e integración psicosocial de cada uno de los menores destinatarios.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se contempla el detalle de todas las prestaciones que conlleva, por lo que **el objeto es completo y se relaciona directamente tanto con las competencias a ejercer por la Comunidad de Madrid como por las necesidades sociales a cubrir.**

Los menores a los que va destinado este contrato son menores con serias dificultades en la vida relacional social y familiar, cuyas capacidades están seriamente alteradas.

**Son menores, que ya han sido objeto de varios ingresos psiquiátricos, que muchas veces no cumplen con los requisitos de permanencia para ingresar en unidades de hospitalización breve (por requerir más tiempo de ingreso del que se puede permanecer en esas unidades) y que además sus síntomas se han cronificado.**





Por otra parte, para acceder a una unidad de media estancia existen listas de espera de ingreso superiores a un año. Los menores a los que nos referimos, por la gravedad de sus circunstancias no pueden permanecer en el domicilio familiar, son menores sobre los que se ha adoptado una medida de protección, y necesitan una atención terapéutica intensiva que sobrepasa, por la gravedad de su patología, a la que se facilita en los centro de protección específicos. Además si su ingreso se produjera en ellos se pondría en situación de grave riesgo a los demás menores residentes, por lo que de no prestarles con inmediatez la atención que precisan les exponemos a un grave riesgo.

Por todo ello, teniendo en cuenta la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a este perfil de menores con medida de protección, se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera que dé respuesta a esta necesidad social, por lo que se considera adecuado poner en marcha un proyecto de 4 plazas para menores con medida de protección y con graves patologías de salud mental y/o trastornos del neurodesarrollo.

Con el objeto del contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los **principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia.**

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios de acogimiento residencial de Menores, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a esta Dirección General, con necesidad de atención terapéutica intensiva debido a la gravedad de la patología y de los síntomas que presentan, con una infraestructura de 4 plazas.

Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA  
Y EL MENOR

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

